



James O'Neill*

La semana pasada (4 de marzo de 2019) se produjo el primer aniversario del incidente en Salisbury, Inglaterra, donde el ex agente doble ruso Sergei Skripal y su hija Yulia se enfermaron en un espacio público en el centro de la ciudad. En muy poco tiempo (12 de marzo) y antes de que se pudieran aducir pruebas, la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, estaba haciendo una declaración en la Cámara de los Comunes atribuyendo la culpa a Rusia.

El entonces secretario de relaciones exteriores Boris Johnson (6 de marzo) trazó paralelos con la muerte de Litvinenko en 2006. El 12 de marzo (antes de la declaración de May), Johnson fue más allá y dijo que la sustancia responsable de la enfermedad de Skripal se había identificado como "A234" y que en consecuencia, en la evaluación británica "era muy probable que Rusia fuera responsable del ataque".

En los siguientes 12 meses, los británicos no se han desviado de ese punto de vista. Esto es a pesar de una gran cantidad de evidencia que contradice esa evaluación y el múltiplo de variaciones de la historia oficial que han surgido. Los británicos también han ignorado las imposibilidades manifiestas de muchos de sus argumentos y el surgimiento de otras explicaciones mucho más plausibles.

No es el propósito de este artículo documentar las características constantemente cambiantes y absurdas del argumento británico. Eso se ha documentado exhaustivamente en otros lugares, por ejemplo, en los excelentes análisis de Rob Slane en su [sitio web](#) .

Para obtener una cronología detallada de los eventos presentados de manera desapasionada, la Embajada de Rusia en el Reino Unido produjo un informe: [Salisbury: Preguntas sin respuesta](#)

Otra característica es el extraordinario grado de superposición entre los escenarios que se están representando en Salisbury y Londres, y la mayoría del personal involucrado y de las actividades de una organización cuya existencia se acaba de divulgar, la Iniciativa de Integridad y su organismo matriz, el Instituto para Statecraft. Uno de los elementos comunes entre el personal es la formación del llamado Dossier Steele, que buscaba desacreditar al Presidente de los Estados Unidos Trump con un catálogo de acusaciones groseras.

En este contexto, es suficiente mencionar solo a un tal Pablo Miller, vecino y amigo de Sergei Skripal y socio de negocios de Christopher Steele, presunto autor del informe mencionado anteriormente. Miller y Steele también eran contactos de Skripal cuando Skripal traicionaba a su país como agente doble. Skripal fue declarado culpable, encarcelado y posteriormente liberado como parte de un intercambio de espías, después de lo cual se "retiró" al Reino Unido.

Lo que es especialmente interesante es que, poco después de que los Skripals fueron hospitalizados, el gobierno del Reino Unido emitió una Notificación "D", cuyo efecto fue evitar la publicación del nombre de Miller en los medios del Reino Unido. Nunca ha habido una explicación convincente para esta censura.

Tampoco apareció el nombre de Miller en los medios de comunicación australianos y, en particular, con ninguna referencia a su participación en el caso Skripal, ni en Rusia ni en el Reino Unido. Eso es solo una parte del fracaso total de los medios de comunicación tradicionales para hacer incluso las preguntas más básicas y obvias sobre este caso. En cambio, ha habido una farsa de repetir la visión del gobierno del Reino Unido, la desinformación en el mejor de los casos o la producción de una serie de historias extrañas que se basan en nada más que en la imaginación febril de varios periodistas.

Hay dos aspectos del caso en los que deseo enfocarme brevemente. Una vez más, casi no ha habido cobertura de estos puntos en los principales medios de comunicación.

El primer punto es la cuestión del derecho internacional. El caso Skripal proporciona una ilustración perfecta de la separación entre la adhesión declarada al "imperio de la ley" o al "orden internacional basado en las reglas" repetida hasta la saciedad por el Reino Unido y sus aliados occidentales, incluida Australia, y el comportamiento real de esos países cuando conviene a su interés nacional ignorar las obligaciones legales.

El último ejemplo de que el Reino Unido hizo exactamente eso fue su intención anunciada de ignorar el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre su vergonzoso maltrato a los isleños de Chagos.

El derecho internacional pertinente en el caso Skripal es, ante todo, las obligaciones de los Estados en virtud de la Convención de 1963 sobre relaciones consulares. El artículo 36 de esa Convención (de la que tanto Rusia como el Reino Unido son parte) dispone que los funcionarios consulares "tendrán la libertad de comunicarse con sus nacionales en el Estado de destino".

Una Convención posterior, la Convención Consular URSS-Reino Unido de 1965 establece derechos similares, y el Artículo 30 de esa Convención define a un "nacional" como cualquier persona que el "Estado reconoce como su nacional". Eso incluye a la Sra. Skripal, de nacionalidad rusa, y al Sr. Skripal, que tiene una nacionalidad conjunta británica y rusa.

Los británicos han rechazado el acceso consular a los Skripals. Esta flagrante violación del derecho internacional aparentemente no es digna de mención en los medios de comunicación occidentales.

Se dio un rechazo similar a los funcionarios rusos que buscaron información sobre el ataque a los Skripals bajo los términos de la Convención Europea de 1959 sobre Asistencia Mutua en Materia Penal.

Las repetidas solicitudes de Rusia en virtud de este Convenio fueron rechazadas, y el Ministerio del Interior del Reino Unido informó a las autoridades rusas que la decisión de no cooperar "se tomó al más alto nivel político".

Como las víctimas son ciudadanos rusos y los presuntos autores también son ciudadanos rusos, la negativa británica envía un mensaje explícito de que no están interesados en resolver el crimen.

Como comentó el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov, "la esencia de la retórica británica es que no están obligados a demostrar nada a nadie". Una lectura de las declaraciones del gobierno británico en los últimos 12 meses confirma abundantemente la exactitud de la declaración del Sr. Lavrov.

Obviamente, la decisión se ha tomado "al más alto nivel político" y, siguiendo el [guión de la](#) Iniciativa de Integridad, se puede hacer más kilometraje en la guerra de propaganda mediante la no cooperación. En esto tienen la complicidad voluntaria de los medios de comunicación occidentales.

El segundo punto se relaciona con el evidente secuestro de Sergei y Yulia Skripal. Con la excepción de la aparición de Yulia en un documental, no se les ha visto ni escuchado públicamente desde el alta del Hospital Salisbury hace 11 meses.

No hay justificación legal para que estén confinados. Yulia, en particular, ha expresado su deseo de regresar a Rusia y obviamente no tiene nada que temer al hacerlo.

Si pudieran dar una cuenta pública de lo que sucedió, muchas de las preguntas sin respuesta podrían aclararse. Si, como parece abrumadoramente probable, se les desactivó con fentanilo en el centro público de Salisbury (con la enfermera de mayor rango del Ejército Británico, el Coronel McCourt estando cerca con su experiencia igualmente conveniente en la guerra biológica) no solo explicaría sus síntomas. Pero lo más importante, su supervivencia.

La abrumadora evidencia científica dice que si de hecho hubieran sido objeto del ataque de un agente nervioso A234, habrían muerto en cuestión de minutos, y mucho menos haber sobrevivido varias horas desde la absurda hipótesis de las manijas manchadas en las puertas. (Ver Slane op cit para una refutación definitiva de este y otros absurdos).

El secuestro de los Skripals (y ninguna otra palabra es apropiada) viola tanto la ley como los derechos humanos de los dos individuos en múltiples niveles. La inferencia abrumadora que se puede extraer de los hechos conocidos (no la versión oficial sin sentido del Reino Unido interpretada por los principales medios de comunicación) es que los Skripals fueron víctimas de un juego de poder geopolítico. Esta estrategia, de nuevo según el guión de la Iniciativa de integridad, tenía como objetivo desacreditar al estado ruso en general y a su presidente en particular.

Las otras víctimas en esta lamentable saga son el público en general. Los principales medios de comunicación han fracasado estrepitosamente, una vez más, en llevar a cabo su tarea de investigación, cuestionando los absurdos e irregularidades y manteniendo al público debidamente informado. Tal incumplimiento del deber conlleva un precio a largo plazo.

** abogado australiano y analista geopolítico con sede en Australia*